

Argentina:

¿De qué crisis hablamos?

II

Dr. Felipe de J. Pérez Cruz

Se ha sostenido que el estallido social que sacudió a la República Argentina en diciembre pasado, tuvo un carácter espontáneo y que su eclosión fue inusitada e inesperada. Considero que estas apreciaciones reflejan una lectura en la que, sobre todo, está el impacto —manipulación mediática incorporada—, de la violencia, los saqueos y la cruenta represión policial que desde Buenos Aires, recorrió la geografía del país, en el pasado diciembre. Esta mirada es, por demás, sospechosamente inocente.

Hoy la imágenes que del país austral transmiten las grandes cadenas y agencias de noticias nos brindan un país convulsionado en el que gobierno trata de articular salidas de emergencia, frente a la población que una y otra vez se muestra airada, propensa al caos. La imposición de tal lectura es inaceptable. La verdadera agresión que sufre el hermano país, los sujetos que articulan su ruina, permanecen en las sombras. Una vez más volvemos a nuestra interrogante de partida, es necesario desbrozar los acontecimientos, definir de qué crisis hablamos.

Cuadernos de Nuestra América en su pasada edición adelantó elementos sobre la naturaleza de la crisis argentina¹ que, en esta segunda entrega, con la inobjetable impronta de los hechos, propongo continuar. Para ello me detengo en los acontecimientos políticos más importantes de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, así como en los primeros ciento veinte días del conflictivo tránsito de Eduardo Duhalde al frente de los destinos del país.

Los avatares políticos de la Alianza

El gobierno de Fernando de la Rúa llegó al poder el 1º de diciembre de 1999 como resultado de la formación de la llamada Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, formada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO). Desde sus primeros momentos este gobierno dio señales, que luego se convertirían en certezas, sobre su inconsistencia política.

El gobierno de la Alianza se olvidó de sus promesas “por el trabajo, la justicia y la educación”, y continuó la política de disciplinada aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional

¹ Ver Felipe de J. Pérez Cruz, “Argentina: ¿De qué crisis hablamos?”, *Cuadernos de Nuestra América*, Vol. XIV, No, 28, julio-diciembre de 2001, p. 105-125.

(FMI). Así se sucedieron las medidas, las reformas y ajustes restrictivos: afectaron los salarios, las pensiones, las prestaciones de seguridad, la salud pública y la educación.

La incorporación al gabinete de De la Rúa del ministro de economía de Menem, Domingo Cavallo representó el último acto de negación del programa electoral por el que habían votado millones de argentinos, y produjo una fuerte conmoción al interior de la Alianza gubernamental. Con la vuelta de Cavallo al Ministerio de Economía, la continuidad de la política neoliberal se acentuó.

Fracasadas las operaciones de “salvataje” del FMI, presionado constantemente por la insolvencia económica y la creciente debilidad política, el gobierno se enfrascó en una aguda polémica con los gobernadores provinciales de mayoría peronista, negados a aceptar nuevos ajustes en el marco de los compromisos con el Fondo y con la aplicación de una propuesta de Cavallo para el funcionamiento mínimo del Estado con un presupuesto de déficit cero.

El ajuste continuo y sin horizonte de cambio fue caldeando el clima social. Quienes primeros marcharon a la protesta fueron los obreros, le siguieron los jubilados, maestros, funcionarios públicos y estudiantes. Los desempleados y marginados comenzaron a manifestarse con fuerza creciente, y el movimiento de cortes de ruta, “piqueteros”, adquirió una sostenida presencia. En el campo aparecieron también movimientos reivindicativos de campesinos y pequeños productores agropecuarios.

De la Rúa resistió sucesivamente hasta diciembre siete huelgas generales, y de una en otra fue ganando cohesión el movimiento obrero. En tales convocatoria coincidieron, necesariamente, los intereses y necesidades de toda la clase y los líderes reformistas de la Confederación General del Trabajo (CGT) —la mayor central sindical del país—, tuvieron que postergar sus reticencias de ir a la acción unitaria junto con la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA).

En octubre el desenlace de las urnas fue una nueva confirmación de la debacle gubernamental. Fue rotunda la derrota del oficialismo en las elecciones, donde se produjo la renovación de dos tercios de la bancas parlamentarias. El Partido Justicialista (PJ) obtuvo el 40 % de votos, contra 23 % la Alianza, y esta última perdió 4,5 millones de sufragios respecto de su victoria de 1999.

Los resultados de las elecciones también conllevaban otras lecturas. El llamado voto bronca (boletas en blanco o anuladas intencionalmente) llegó a ocupar el 21,1 % en el total de sufragios. Fue un mensaje atronador: casi 4 millones de argentinos, así manifestaron que no se sentían representados por ninguno de los partidos en disputa. Por otra parte la izquierda —sumada en toda sus dispersas

agrupaciones— resultó ser la primera fuerza en la ciudad de Buenos Aires y la segunda en el Cono Urbano bonaerense.

Hacia fines de noviembre la situación fiscal y financiera llegó a ser en extremo delicada. Se tornó evidente que el gobierno había perdido acceso a nuevos financiamientos desde el exterior. En este escenario apareció un inminente colapso del sistema financiero nacional. Y el gobierno, lejos de exigir responsabilidades a los banqueros especuladores, optó por poner coto a la extracción. Se inició entonces lo que se conocería como “el corralito financiero”. Con la medida no solo se salvaba a los banqueros, sino que una vez más se hacía recaer los problemas existentes sobre los salarios de los trabajadores y los ahorros de los sectores medios.

El congelamiento de los fondos bancarios llegó cuando al gobierno prácticamente ya no le quedaba nada por recortar y ajustar, cuando la cifra de pobres alcanzaba el cincuenta por ciento de la población, el 75 % de los asalariados vivían rozando la línea de pobreza, y miles de pequeños empresarios, profesionales y funcionarios completaban el costo de su canasta básica, administrando los ahorros —el 98 % de los depósitos son menores a 30 mil pesos— que habían logrado hacer en la época de bonanza del modelo.

Cuando el 12 de diciembre las tres centrales sindicales convocan a la séptima huelga general con el lema “Para que no nos roben los salarios, los ahorros, el trabajo y la patria”, la situación del país ya se encaminaba a una rápida y decisiva eclosión. En las provincias se incrementan los movimientos de protesta, los cortes de rutas evolucionan hacia situaciones de insurgencia, y comienzan a darse asaltos a supermercados y otros hechos de violencia. El nutrido espectro medio argentino, directamente afectado, sumó una fuerza decisiva al movimiento de protesta, y con multitudinarios “cacerorazos” cambió drásticamente la correlación de fuerzas.

Los días 19, 20 y 21 de diciembre, en el Gran Buenos Aires y en la mayoría de las provincias argentinas el pueblo se volcó a las calles en decisiva protesta. De la Rúa decretó un Estado de Sitio que nadie respeta, la situación de rebelión e ingobernabilidad se extendió por todo el país. El drama que venían sufriendo los argentinos, comienza a ser catalogado por los grandes medios de prensa con la recurrente y siempre sugestiva palabra: crisis.

El masivo estallido popular no dejó opciones para el gobierno de la Alianza. El presidente Fernando de la Rúa dimitió el día 22, antes lo había hecho Domingo Cavallo.

Los saldos negativos del modelo neoliberal

Los hechos más violentos registrados en la Argentina desde la dictadura, con un saldo de 29-30 muertos en todo el país y siete en la capital, con los que finalizó el año 2001, no solo colapsaron el gobierno. Fueron el resultado y la demostración de la inviabilidad y la peligrosidad de la aplicación desenfrenada de las fórmulas neoclásicas.

Según datos preliminares de la CEPAL el producto interno bruto (PIB) argentino en el 2001 continuó por tercer año consecutivo exhibiendo cifras negativas, mientras se acentuó la deflación de precios y salarios.² La deuda externa aumentó en 142 % —se estima entre 142 000 y 147 000 millones de dólares—, y en la misma década aumentaron sus intereses en un 245 %.

En todo el año 2001 el retiro de depósitos de los bancos locales tuvo pocos antecedentes —si es que hay alguno— en el mundo contemporáneo. Se fueron de las entidades el equivalente al 20 % de los depósitos. Una idea de lo que esto representa nos la da el crac de 1929 en los Estados Unidos, recordemos que la crisis se disparó cuando se retiraron de los bancos el 18 % de los depósitos. Súmese que de ese 20 %, el 60 % de los fondos se fueron en apenas tres meses. Para no pocos especialistas, ningún sistema financiero en el mundo, ni siquiera el suizo, hubiera podido resistir esa enorme succión de fondos.

Las cifras económicas de 2001 se complementan con la subida a un 18,3 % del índice de desempleo y a un 16 % de la tasa de subocupación. Mientras en 1991 los problemas de empleo afectaban a 1 700 000 personas, ya a principios del 2002 alcanzan a 4 600 000 de la población económicamente activa (PEA).

Un estudio de la consultora Equis —basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)—, hecho público a principios del pasado enero, mostró una realidad desgarradora: en el 2001, 730 000 argentinos cruzaron la línea de la pobreza. Cada día surgieron 2 000 nuevos pobres, es decir, más de uno por minuto, que sobrevivían con menos de 4 pesos diarios. En cifras globales los pobres en el país suman 16 millones, alrededor de un 40 % de la población, y solo en la capital viven 4,5 millones. Hay provincias como Formosa, Chaco y Tucumán donde la línea de pobreza alcanza o sobrepasa al 55 % de sus pobladores.

² A menos que se señale otra fuente los datos estadísticos tienen por base, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, CEPAL, LC/G.2153-P/E, Santiago de Chile, diciembre del 2001, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Datos preliminares, Buenos Aires, diciembre 2001- enero 2002.

La situación de los jóvenes en tal panorama era de las más alarmantes. Según datos del INDEC en octubre de 2001 existían en todo el país ocho millones de jóvenes por debajo del índice de pobreza. Ese año se incorporaron a los pobres un millón de jóvenes más y en la capital y el Gran Buenos Aires existían 700 mil jóvenes sumidos en la indigencia.

Este fenómeno de empobrecimiento colectivo tuvo características muy peculiares. En los años 1970 y 1980, la pobreza estaba vinculada directamente con un déficit de infraestructura o vivienda, ahora, sorprendentemente, la mayoría de los pobres no proviene del desempleo, sino del constante deterioro de los salarios tanto en las empresas estatales como en las privadas. Esto ha generado el fenómeno inédito y masivo de que de millones de argentinos se han deslizado de los sectores medios a la pobreza. Así según la investigación de Equis el 60 % de los nuevos pobres de la capital, Buenos Aires, y el conurbano hace un año pertenecía a los sectores medios.³

En general el 75 % de la población no alcanza a duplicar los valores que marcan la línea de pobreza. Y en la década del noventa la distancia entre el 10 % más rico de la población y el 10 % más pobre, pasó de 12 a 27 veces.

Las estadísticas, sin embargo no son capaces de expresar todo el drama argentino. Las decisivas transformaciones económico productivas que se efectuaron durante los años noventa estuvieron acompañadas de otros negativos fenómenos no menos agresivos.

La agresión cultural e ideológica

El amplio arsenal de la desideologización y la despolitización fue utilizado contra una nación que venía de regreso de dictaduras militares, de la pérdida de más de 30 mil de sus hijos asesinados o desaparecidos, y que tuvo como colofón una guerra azuzada con irresponsabilidad por la casta militar y perdida vergonzosamente por esta. En circunstancias de una sociedad tan fuertemente sacudida por la represión y el terrorismo de estado, la vuelta al sistema representativo y a una democracia restringida, fue publicitada por la gran burguesía argentina, como máxima conquista nacional. Por tales vías se renovó la hegemonía de la política burguesa, reconstruyó el pacto reformista y conservador en el movimiento social argentino y consolidó el aislamiento de los partidos y fuerzas de izquierda.

El neoliberalismo y el subsiguiente establecimiento del *stablishment* como grupo hegemónico de la clase burguesa en el país, colocó en una situación de subordinación primero y ruina después, a importantes segmentos de la burguesía industrial y agropecuaria, y les hizo perder su vitalidad

³ “Argentina: un nuevo pobre cada minuto”, *BBC*, 4 de enero de 2002.

como sujetos económicos, sin embargo les prometió un país moderno “de primer mundo”, alejados de las penurias y conflictos. Con este incentivo también se unió al consenso neoliberal la pequeña burguesía, los nutridos sectores medios, la aristocracia obrera, los trabajadores de las empresas transnacionales y del Estado, junto a otros grupos favorecidos por el modelo. El artificial sistema de la convertibilidad sustentaba económicamente esta irreal propuesta.

Salvo excepciones, los pequeños propietarios privados y cooperativos fueron desplazados de las industrias culturales y de su participación en los medios masivos de comunicación. La ola privatizadora completó la ofensiva monopólica y el espectro mediático del país quedó concentrado en manos del capital transnacional y sus aliados internos. Un poderoso aparato de control ideológico y opinático quedó conformado y con él se cerró el cerco de la ofensiva ideológica neoliberal.

Los neoliberales aplicaron contra la nación argentina sus técnicas de enajenación colectiva y apoteosis del individualismo. De desarticulación del entramado social, erosión de las identidades colectivas y las solidaridades políticas. Se instaló —diría el periodista Arturo M. Lozza— el discurso del “no se puede” y del escepticismo. En las otroras rebeldes universidades se impuso la lógica del clientelismo, del estudio vinculado al mundo de los negocios, y al éxito personal.⁴

La marginación, la pobreza y exclusión fueron criminalizadas. La lucha contra la inseguridad ciudadana pasó a convertirse en una de las banderas más enarboladas por los políticos, con ello se logró segregar a quienes el sistema no asimilaba, a través de la represión policial, el sistema carcelario y la proliferación de agencias y cuerpos privados de seguridad.

Así como fue perdiendo patrimonio, a la sociedad le fueron arrebatados proyectos, sueños, amores, autoestima, historia compartida y cohesión nacional. Bajo las claves de la mercantilización, el apoliticismo y la vanalización de la cultura se promovió la expansión de la anomia social. En este empeño colaboraron por igual los directivos de peronismo y radicalismo.

Los sepultureros del nuevo “viejo” orden

El comienzo de la crisis del sistema de convertibilidad y con ello la ampliación de la franja de afectados dio al traste también con la expansión del consenso ideológico cultural neoliberal. El surgimiento del movimiento anticorrupción y el propio nacimiento del FREPASO, en busca de “un país solidario”, dan la medida de que cómo aparecieron fisuras en el consenso neoliberal. En los

⁴ Arturo M. Lozza, “Irrumpe la cultura de la broca”, *Enfoques Alternativos*, Buenos Aires, Año 1, No. 1, marzo de 2002, p. 18.

últimos años del gobierno de Ménem y de manera rotunda en el episodio terminal de De la Rúa, millones de argentinos pasaron a sentir que definitivamente eran hombres y mujeres del empobrecido mundo subdesarrollado.

La traición del gobierno de la Alianza a su propuesta electoral, y la vuelta del menemismo en la figura de Cavallo completaron el desprestigio de la clase política. Con Ménem quebró la tradición peronista, con De la Rúa desapareció toda posibilidad para los radicales y la alternativa del populismo centroizquierdista quedó en severo cuestionamiento.

Las grandes movilizaciones obreras, estudiantiles, magisteriales y populares contra los ajustes desarticulaban buena parte de los mecanismos manipulatorios. La arremetida contra el magisterio y la educación pública, símbolos históricos de la nación, sacudió la conciencia patriótica de los más amplios sectores de la población. Finalmente la congelación de los fondos, afectó de manera frontal a la pequeña burguesía y los sectores medios, precisamente los grupos sociales que marcaban con más consecuencia el consenso ideológico neoliberal. Despertaron de un sueño de sociedad de “clase media”, de turismo y cultura adocenada, de falsa grandeza y europeísmo.

El modelo dio por resultante una sociedad traumatizada, en la que reinaba, junto al desempleo, la pobreza y el hambre, una compleja explosión de sentimientos: sorpresas, desencantos —suicidios y traumas psicológicos—, e iras, de aumento de la violencia y la criminalidad. Sin embargo, no todo era asombro, frustración o ira.

Mientras Ménem en sus últimos años y De la Rúa en la continuidad del menemismo, multiplicaban el número de marginados, pobres, y desempleados, en los barrios obreros, en los cordones de pobreza, en las circuitos provinciales, millones de argentinos se enfrentaron desde la cultura comunitaria, con valor e inteligencia, a la diaria lucha por la sobrevivencia.

En la exclusión y la marginalidad nacieron numerosas iniciativas de cooperación y asociación para la resistencia, se generaron prácticas de autonomía respecto al Estado, los partidos y el sistema, ejercicios de democracia de base, de impugnación al autoritarismo represivo e impugnación global al poder burgués. Y en ese protagonismo anónimo comenzaron a forjarse nuevos sujetos, las nuevas rebeldías que necesariamente tendrían que tener una eclosión política.

En Argentina por demás la reacción no pudo completar su obra de destrucción de las organizaciones revolucionarias. Aún lastrado por el embate enemigo, el sujeto revolucionario mantuvo su presencia combativa en no pocos sectores de la vida nacional, en acciones disímiles y acumulativas.

Numerosos activistas revolucionarios se insertaron en el movimiento obrero y popular. Se dieron a la tarea de compartir su experiencia organizativa y política en la construcción de las nuevas circunstancias, en las luchas de los piqueteros, de los barrios y comunas, en la defensa de las instituciones culturales y educativas nacionales y en la creación de novedosas instancias de participación y gestión político social.

En el enfrentamiento a la ofensiva ideológica neoliberal se forjaron también legados que se convirtieron en símbolos nacionales populares. Así dejaron su impronta en el sujeto colectivo —con mayor o menor nivel de concientización—, con una inobjetable presencia, el constante ejercicio de movilización ética y patriótica de la madres y abuelas de la Plaza de Mayo, de las organizaciones de hijos y familiares de los desaparecidos, y el entramado de organizaciones no gubernamentales (ONG) que continuaron aprovechando cada resquicio de la excluyente sociedad burguesa, para denunciar a los represores y luchar por una verdadera democratización de la sociedad argentina.

Una vez más la sabia lectura sociológica de Carlos Marx y Federico Engels en el para no pocos olvidado Manifiesto del Partido de los Comunistas, volvía con su inobjetable impronta: El reinado de la burguesía neoliberal no podrá ser absoluto. La historia no ha concluido.

Lejos del estallido espontáneo los acontecimientos de diciembre de 2001 eran la resultante de un largo proceso de acumulación. En ellos hacía su aparición el nuevo sujeto social nacido de la resistencia frente a la agresión neoliberal,⁵ los sepultureros, más temprano que tarde del nuevo “viejo” orden.

Duhalde: del decir al hacer

Tras la salida de De la Rúa, la existencia de un Congreso mayoritariamente peronista, otorgó el turno para hacer gobierno, al Partido Justicialista. La selección del sucesor presidencial no resultó fácil. Las fisuras y pugnas, los personalismos y ambiciones de unos y otros políticos peronistas, salieron a flote con toda virulencia. Tres presidentes pasaron por la Casa Rosada. El actual mandatario Eduardo Duhalde, fue la cuarta propuesta y el quinto jefe de Estado en doce días de crisis institucional.

⁵ Patricio Echegaray, “¿Hacia un régimen blindado?, *Enfoques Alternativos*, Buenos Aires, Año 1, No. 1, marzo de 2002, p. 6.

Duhalde al llegar a la presidencia, anunció que iba a cambiar el eje de poder que predominó durante la última década, y se definió como antagonista del modelo neoliberal impuesto en el país. Para él se hacía necesario un nuevo pacto nacional productivo.

La nueva administración puso fin al régimen de la convertibilidad, definió una paridad fija de 1,40 pesos por dólar, dio confianza a los ahorristas de que recuperarían su dinero y se comprometió a impedir el alza de los precios del combustible y de las tarifas de los servicios. Así mismo ratificó que el país no estaba en condiciones de pagar la deuda externa en esos momentos.

El criterio del Presidente entonces era que quienes más se habían favorecido con el modelo económico impuesto al país, debían ser ahora quienes soportaran los mayores sacrificios, en particular el sector petrolero y los servicios públicos operados por empresas privatizadas. Tal retórica nacionalista apareció respaldada por la Ley de Emergencia Pública.

Duhalde también se pronunció por atender las más perentorias necesidades de los millones de pobres que hay en Argentina. Planificó un programa de ayuda a jefes de familias desempleados para llegar a un millón de familias sin empleo, y calculó que podría beneficiar a un promedio de seis miembros de esos núcleos, para abarcar en total a seis millones de personas. Los otros diez millones de pobres argentinos tendrían que esperar.

Las medidas de recuperación del anunciado programa nacional fueron convirtiéndose en las semanas subsiguientes en meras proclamaciones. Frente a los ataques del *stablishment*, las presiones directas del gobierno de los Estados Unidos y su extensión a través FMI, España y la Unión Europea (EU), el gobierno argentino comenzó a ceder primero, para luego claudicar. El recorrido de su programa económico hace evidente su real filiación.

El Presidente admitió el día 20 de enero que no existían dólares en el sistema financiero para devolver los fondos en esa moneda a los depositantes, con ello incumplió una de sus principales promesas al arribo a la presidencia. Miles de argentinos ahora, además de estafados, se sentían engañados por un Presidente que les había afirmado que se le devolverían sus ahorros en la moneda en que estaban hechos los depósitos. Esta fue la primera de las muchas ratificaciones que tendrían de la falta de voluntad de cambio del Presidente. Después se produciría la renuncia a la Ley de Emergencia Pública, a los pretendidos impuestos a las transnacionales y la fabulosa licuación de las deudas de las grandes empresas a costo del aumento de la deuda del Estado. En tal panorama el alza de las tarifas de las empresas de servicios que hoy sufren los ciudadanos era de esperar.

A partir del 6 de febrero el Gobierno en cumplimiento de las órdenes del Fondo Monetario Internacional estableció la flotación del dólar y la desaparición del mercado cambiario oficial. Y para finales de abril con el apoyo de la bancada peronista el gobierno impuso en el Parlamento una ley que impidió que los ahorradores retiraran los depósitos bancarios, a menos que contaran con una sentencia judicial firme.

Más allá de la carrera por obtener lo que consideran el préstamo salvador, no hay un programa para el crecimiento económico, ni acción para estimular la demanda interna. En tal perspectiva el diseño económico parece destinado a aumentar la exportaciones con el objetivo de pagar la deuda, ya que prácticamente no hay nada que privatizar, ni capacidad de más endeudamiento, ni otras fuentes.

La devaluación puede introducir presiones inflacionarias muy peligrosas y el conocido fantasma de la hiperinflación volver a flagelar a los argentinos, que ya se enfrentan a los aumentos de precios provocados por la depreciación continua de la moneda.. Ante tal perspectiva ya se preparan los heraldos de la dolarización.⁶ El “corralito” continúa siendo un explosivo componente de la situación. A pesar de todas las medidas tomadas para burlar a los ahorristas, la quiebra masiva de las instituciones financieras continúa en el horizonte.

Desde diciembre la parálisis económica se ha ido extendiendo. Vastas áreas productivas y comerciales formales e informales comenzaron a desintegrarse. Comparando enero de 2002 con igual mes del año pasado la construcción cayó al 44 %, la industria al 18 %, las ventas en los shopping centers al 40 %. Mientras, el presupuesto que aprobó ambas cámaras del Congreso pronostica una caída del 4,9 % del PIB para el 2002.

La recaudación de los impuestos nacionales se redujo en un 20 % en febrero en comparación con igual mes de 2001. En numerosas provincias y municipios el cobro de tributos se ha extinguido lo que acerca la posibilidad de una parálisis administrativa general.⁷

La situación económica es solo un ángulo de la parálisis gubernamental. El gobierno permanece inerme frente a disímiles problemas pendientes y otros nuevos, como el logro de la eficiencia del aparato estatal, la lucha contra la corrupción —las acusaciones contra la Corte Superior de Justicia en particular—, y las investigaciones sobre la salida ilegal de millones de dólares del país justo antes de establecerse el “corralito”.

⁶ Ver José Ángel Pérez y Gladys Hernández, La situación actual en la República Argentina, en Felipe Pérez (coord.), Mesa de Trabajo, *Colección Reflexiones*, Centro de Estudios sobre América, Ciudad de La Habana, 2003, p. 25-26.

⁷ Jorge Berstein, “El fracaso de un país burgués”, *Enfoques Alternativos*, Buenos Aires, Año 1, No. 1, marzo de 2002, p. 3.

De la parálisis a la dictadura

La debilidad del régimen y la falta de voluntad política prevalecientes se constata en el fracaso del llamado “diálogo argentino” puesto en marcha el 14 de enero por Duhalde con el coauspicio de la Iglesia Católica.

Dentro del Partido Justicialista Duhalde es hostigado por los simpatizantes de Ménem y otros adversarios. En la oposición los radicales parecen ser sus más sólidos colaboradores, así como una parte de la dirección del FREPASO, mientras otra se manifiesta abiertamente en la oposición. El Presidente debió desmentir el 21 de marzo su renuncia, en un clima de crecientes versiones sobre disidencias en el seno del oficialismo. En abril cumplió cien días como presidente, en medio de críticas de la mayoría de los sectores políticos. A finales de ese mes en medio de fuertes desavenencias con el Senado y los gobernadores, se produjo la salida del ministro de economía Jorge Remes Lenicov, figura central del gabinete.

Las agrupaciones de centroizquierda con representación parlamentaria se han situado en abierta oposición a la política de Duhalde. La líder socialista de Argentinos por una República de Iguales (ARI), la diputada Elisa Carrió, ha articulado en el ámbito legislativo una nueva coalición que abarca a representantes de cinco partidos al interior de la Cámara de Diputados. Se trata de uno de los llamados interbloques, y está integrado por 29 parlamentarios. Tal coalición representa la tercera fuerza política en la Cámara Baja.

Carrió destacó la necesidad de “refundar la República” y de encontrar una salida institucional a lo que considera una crisis de legitimidad por la que atraviesa Argentina. En lo particular, pidió la reducción del período de mandato presidencial de Duhalde de dos años a uno. Reclamó una reforma constitucional que permita la participación política de los nuevos movimientos sociales surgidos al calor de la crisis.

La extrema fragilidad de la dirección política del país tiene una constante manifestación en las relaciones de la federación con las provincias. Los gobernadores peronistas y algunos legisladores se constituyeron el 25 de abril, en la Casa Presidencial de los Olivos, en un Cabildo abierto, para debatir sobre la conformación del gabinete y una nueva política económica. Duhalde constató entonces toda su debilidad y tuvo que aceptar las presiones de los ejecutivos provinciales. En tal clímax se arribó a un acuerdo marco de catorce puntos, que complace las exigencias del FMI: se acordó que en 90 días se enviaría al Congreso una nueva ley de coparticipación federal.

La negociación con los gobernadores situó al presidente en una situación de máximo cuestionamiento. “Duhalde sigue en el poder sólo porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de él”, se afirmaba en un comentario publicado en *Página 12*.⁸

Aunque los movimientos de protesta frente a la Plaza de Mayo y en otras zonas de Buenos Aires y las provincias argentinas no cesaron, el día 25 de enero Duhalde tuvo que resistir la primera gran manifestación después de su toma del poder. Así empezó a comprobar la fugacidad de la tregua social que creyó recuperar en sus primeras semanas de mandato.

Como resultado de los enfrentamientos del 25 de enero fueron detenidas 68 personas, y hubo 10 policías heridos. De inmediato le siguió otra protesta más masiva aún el 28 de enero. Desde entonces el Presidente ha tenido que enfrentar nuevas y masivas marchas y concentraciones. También a partir de esos días se constató por encima de las iniciativas de dialogo con las masas, un empleo cada vez más directo de la fuerza represiva. Así se confirmaron los primeros síntomas del paso del gobierno de Duhalde hacia un tipo de dictadura civil.⁹

La aparición en el Cono urbano bonaerense, desde el mismo día de la asunción de Duhalde de grupos de tareas civiles en acciones de provocación contra la izquierda, la explosión de una bomba en el local de Barracas del Partido Comunista, los crecientes niveles de violencia policial y la judicialización de la protesta social, mientras se mantienen impunes los crímenes de diciembre, constituyen un inventario de hechos concretos que evidencian el camino represivo que asume el gobierno.

La reforma política que impulsa el mandatario constituye un paso importante en el diseño de un régimen de representación restringida. El ahorro de mil millones de pesos en el presupuesto nacional a través de la reducción a la mitad de los gastos del aparato político del Estado, como manera de financiar el programa de ayuda a jefes de familias desempleados, esconde en los hechos la búsqueda de una sustancial reducción de la participación en el Congreso federal y las provincias, de los partidos y organizaciones en representación de los intereses populares. Estas fuerzas no cuentan con el financiamiento de las grupos burgueses ni con los poderosos aparatos electorales del peronismo y el radicalismo.

⁸ Sergio Moreno, “El gobierno del Cabildo abierto”, *Página 12*, Buenos Aires, 25 de abril de 2000.

⁹ Horacio Alberto López, “Intervención en Mesa Redonda Internacional “Argentina a 20 años de la Guerra de las Malvinas”, Asociación para la Unidad de Nuestra América (AUNA-Cuba), Ciudad de La Habana, abril de 2002.

En el balance de los factores políticos no pueden desconocerse los elementos militares. Ahora aparecen duramente golpeados económica y políticamente. Las Fuerzas Armadas perdieron casi el 90 % del financiamiento, si se compara su presupuesto actual con el de la década de 1980. Los procesos contra los represores en época de la dictadura, llevaron a la cárcel a los principales cabecillas del golpe, no pocos cuadros de la alta y media oficialidad fueron procesados y otros aún están sujetos a acusaciones y diversos cursos legales.

En el seno de la institución, aparecen nuevos elementos progresivos como los que se nuclean alrededor del Centro de Militares por la Democracia Argentina (CEMIDA). Sin embargo no hay indicios de que como cuerpo, se fracturaran sus lazos clasistas con la elite burguesa que realmente gobierna el país. El jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, y otros altos oficiales mantienen un fluido contacto con los dirigentes del *establishment* empresarial.

Las Fuerzas Armadas no han estado inactivas en estos años, integran el esquema represivo de la OTAN, dada la condición de “aliado extraterritorial” del bloque guerrerista del país, y unidades argentinas han integrado la cobertura internacional de las aventuras intervencionistas de los Estados Unidos en los últimos años. En los cursos que se ofrecen a los oficiales la Escuela de Guerra, han trabajado con la hipótesis de conflictos sociales dentro del territorio argentino y también con la perspectiva de guerra contra el terrorismo en la Zona de la Triple Frontera. Estas hipótesis se han ensayado recientemente en el teatro de operaciones argentino, en ejercicios conjuntos con el Ejército norteamericano.

Tanto el presidente Duhalde como otras personalidades del peronismo y el radicalismo han manifestado su preocupación por informaciones que acusan la existencia de conspiraciones golpistas en las que de una manera u otra están involucrados los elementos militares. Esta puede ser una maniobra para presionar a la opinión pública y crear estados de opinión, pero en una situación como la que vive el país, no se obvia ninguna posibilidad.

Se conoce que en medio del estallido de diciembre el canciller Carlos Ruckauf, entonces gobernador de Buenos Aires, presionó al Ejecutivo para que utilizara al Ejército. Oficiales de rango como el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, General de División Hernán Guillermo Olmos, en declaraciones a la prensa no ha descartado que se llegue a una instancia de crisis social donde “haya que decidir el empleo del poder militar”.¹⁰

¹⁰ Fernando Oz, “Desde la provincia de Misiones, un general del Ejército no descarta que haya que decidir el empleo del poder militar”, *Misiones on line*, abril de 2002.

El gobierno de Duhalde se riefere además de dotar al cuerpo militar de nuevas misiones, por lo pronto en la defensa de las fronteras. ¿Y no es este un primer paso para vulnerar la Ley de Defensa y Seguridad que prohíbe el empleo de los militares en misiones dentro del país? También se ha manifestado la necesidad de perfeccionar los cuerpos policiales, de volver a los grupos elites antimotines. ¿No estarán ambos en un esquema represivo articulado por el propio Duhalde, quien ya aplica con todo rigor importantes medidas represivas?

Para Ricardo Ragendorfer un sector del gobierno de Duhalde, en el que sitúa al ministro de defensa Horacio Jaunarena, propugna la posibilidad de adecuar el marco legal para la aplicación de acciones castrenses sobre los conflictos internos”.¹¹ En la acentuación de la debilidad política gubernamental y la crisis social, con el Presidente actual u otro actor del *staff* burgués la alternativa de la dictadura cívico militar no puede descartarse.

Estados Unidos: de la falsa indiferencia a la extorsión descarnada

El *Washington Post* el día de la designación de Duhalde a la presidencia, lo calificaba como “un crítico en años recientes de la política de mercado libre”.¹² Veintitrés días después el propio diario norteamericano se regocijaba de como el presidente argentino experimentó una “rápida evolución” y pasó a “ser más pragmático que populista”.¹³

La política norteamericana hacia Argentina contempla un amplio espectro de intereses estratégicos, pero por su inmediatez y oportunidad, el tema financiero se constituiría en el contenido principal de la relación. Encerrados en la lógica del sistema, los gobernantes argentinos no podían concebir otra salida que no fuera la de obtención de nuevos préstamos y a tal opción apostaría la estrategia de subordinación desarrollada por Washington.

La estudiada demora del programa de asistencia financiera al país sudamericano sería el elemento decisivo. La posición fue la de no dar un solo préstamo hasta que las medidas de completa colonización económica, fueran instrumentadas y su futuro quedara suficientemente garantizado en el plano institucional. Para ello el gobierno estadounidense tomó distancia del problema argentino, y dejó hacer a sus empleados del FMI. La no penetración en esta estrategia de subversión ha llevado

¹¹ Ricardo Ragendorfer, “Duhalde tras los pasos de Lepke”, *Enfoques Alternativos*, Buenos Aires, Año 1, No. 1, marzo de 2002, p. 9.

¹² *Washington Post*, Washington DC., January 3rd, 2002.

¹³ *Washington Post*, Washington, DF., January 26, 2002.

a no pocos especialistas a la errónea apreciación de que Argentina no tiene importancia geoestratégica para los Estados Unidos.

A pesar de la explosiva situación existente, el FMI no mostraría toda la buena disposición que sí tuvo con las anteriores administraciones. Quienes habían estado sistemáticamente inyectando con fondos el modelo, ahora desestimaron dar una ayuda inmediata evaluada en unos 15 000–20 000 millones de dólares.

El Fondo además, se caracterizó por hablar de la Argentina como si fuera un enfermo de cuyo estado no se hacía responsable. Las declaraciones de los máximos directivos de FMI fueron en todo momento duras y despectivas. Horst Köhler, titular del Fondo, creó una justa indignación en el país cuando señaló con prepotencia que la Argentina no saldría de la crisis “sin sufrimiento”.¹⁴

Frente a las declaraciones y el actuar de los gerentes del FMI, los ministros del área económica y el canciller del gobierno de Duhalde, se dedicaron a persuadir sobre la vocación fondomonetarista del gobierno. Hablaron con todos los ministros de Economía del Grupo de los 7, también con los jefes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La visita del canciller Ruckauf a Washington el martes 29 de enero para reunirse con el secretario de Estado, Colin Powell, selló la claudicación del gobierno argentino. Con el canciller, Duhalde envió una carta al presidente Bush en la que el gobernante argentino señalaba que lo más pronto posible eliminaría las medidas transitorias de corte direccionista y reiteró como su gobierno quería seguir siendo un aliado extra OTAN de los Estados Unidos. Así dejaba clara la renuncia tácita al programa inicial que se planteó y cedía por completo ante las presiones norteamericanas.

Duhalde en su carta aludió también a las palabras de Horst Köhler, El Presidente muy lejos de su inicial tónica seudonacionalista, dijo saber que la salida “será dolorosa” pero que tomaría “las acciones necesarias con plena conciencia del sacrificio que implican”.¹⁵

La misión de Ruckauf sería entonces la de ratificar la aceptación de las reglas de Washington, en busca de que se concretara el ansiado apoyo financiero norteamericano. El canciller, además, sobrecumpliría las expectativas de conciliación con la aceptación del dictado anticubano de la administración Bush.

¹⁴ Ver declaraciones del director gerente del Fondo, Horst Köhler, *Le Monde Diplomatique*, París, 22 de enero de 2002.

¹⁵ Guido Braslavsky y Mariano Thieberger, “Carta de Duhalde a Bush: pidió una rápida asistencia”, *Clarín*, Buenos Aires.

La claudicación de Duhalde frente a los Estados Unidos, imponía el cuestionamiento de las perspectivas políticas inmediatas y mediatas del gobierno. Los directores de la política exterior norteamericana sabían de la resistencia del expresidente Alfonsín, de importantes sectores del peronismo, y la izquierda congresional, a un nuevo pacto antinacional con el FMI, y a un seguidísimo servilismo frente a los dictados de Washington. Precisamente a vulnerar esos consensos adversos se dirigió la política de fuerte extorsión instrumentada a través del FMI.

En el desarrollo de su estrategia los norteamericanos contarían con el apoyo consensual de la Unión Europea, coordinada por el gobierno de España, quien después de los propios Estados Unidos, es el sujeto externo más importante en el escenario argentino.

Tanto España como la Unión Europea se sumaron a la presión por la aprobación previa de las medidas económicas antes de brindar la asistencia financiera. Por otra parte han desestimulado en el seno de la Unión Europea, los intentos argentinos de incentivar un acuerdo bilateral de libre comercio como el chileno.

Para la consecución de sus propósitos antinacionales, los Estados Unidos cuentan también con sus aliados internos. Luego del climax del estallido social del 20 de diciembre y de las primeras semanas posteriores, se recompuso la alianza entre los grandes grupos económicos, básicamente las empresas extranjeras privatizadas, los bancos extranjeros y los sectores de la burguesía local que le son afines; y con ello el Estado Mayor del *establishment* retomó todo su accionar político.¹⁶

Las visitas a Argentina de funcionarios y especialistas del FMI para cumplir la misión de monitoriar la marcha de los acontecimientos, se han ido incrementando en número y nivel. Sin embargo muy poco ha adelantado el añorado préstamo. Estas misiones solo se comprometen a regresar lo antes posible para trabajar en el completamiento de todos los elementos de lo que este denomina un programa económico global. En realidad se trata de consolidar el mando del FMI sobre la dirección y ejecución de economía del país.

En las filas de los partidos burgueses se comprende la trascendencia de ceder la soberanía de la nación a los funcionarios del FMI, pero autojustifican su claudicación con el hecho de sentirse atrapados por la dinámica imperial. En definitiva nada los separa de la lógica dependiente de Duhalde y sus ministros neoliberales, responden al mismo condicionamiento clasista, ideológico y psicológico frente a los dictados de Washington. Es por ello que se precipitó la urgencia de la aprobación congresional del presupuesto para este año y el pacto fiscal con los gobernadores. La

¹⁶ Víctor M. Carriba, "El alumno argentino del FMI entró en bancarrota", *Prensa Latina*, 7 de febrero de 2002.

disidencia de los gobernadores quedó reducida a la firma de acuerdos bilaterales provincias-nación para monitorear la reducción del déficit fiscal.

La presión a favor de los intereses transnacionales que hace el FMI aprovecha la claudicación de la clase política argentina para empujarlos a adoptar medidas cada vez más antinacionales. Tal es el caso de la reformulación de la ley de quiebras y la derogación de la ley de subversión económica.

El Fondo obtuvo reimplantar un mecanismo desechado en enero según el cual un acreedor puede hacerse cargo de una empresa declarada en bancarrota. En las circunstancias del país, tras la devaluación y la parálisis económica, muchas empresas están en dificultades; y este es un mecanismo que facilita al capital extranjero apoderarse a bajos costos del parque industrial que aún no ha dominado.

Contra la denominada “subversión económica” los intereses transnacionales vienen trabajando desde 1974, año en que fue dictada. Para el *establishment* esta disposición era discriminatoria y a consecuencia de la misma varios altos ejecutivos pudieron ser detenidos y procesados por maniobras dolosas que ocasionaron daños a la economía del país.

Como lo previó la política norteamericana en esta búsqueda de consenso para aprobar las medidas de la agenda fondomonetarista se han desgastado y comprometido todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y de manera particular el peronismo y el radicalismo. Así se ha logrado borrar por el momento todo vestigio del discurso seudonacionalista y antineoliberal que afloraba en sectores de la política burguesa del país, y se ha reforzado el comprometimiento y el sometimiento político que los Estados Unidos perseguían.

La poderosa Entente de extorsión que se ha alineado contra Argentina, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, parece decidida a convertir el país en una colonia administrada por el FMI. En este proceso de aherrajar cadenas el imperio del Norte se ha convertido en un actor principal del drama que vive el país. ¿Hasta dónde podemos hablar entonces de una crisis “de” Argentina?

La agudización de la crisis, y la explosión social deben estar entre las hipótesis de trabajo de los departamentos del gobierno estadounidense. ¿Acaso la insistencia en concluir el llamado programa económico global e institucionalizarlo pretende adelantarse? ¿Se estarán fabricando los recurridos argumentos para una nueva intervención? ¿Para la aplicación de la doctrina extraterritorial de la OTAN? Entonces el Plan Colombia tendría una sólida retaguardia. La izquierda brasileña una frontera de contención. El MERCOSUR no tendría futuro, y el ALCA avanzaría con esa fuerza más

sobre nuestros pueblos. Y las apetencias geoestratégicas del imperio hacia la Antártica y el Atlántico Sur se verían fortalecidas.

El movimiento en curso

En Buenos Aires las manifestaciones son permanentes. Se baten cacerolas frente al palacio Presidencial, ante los locales gubernamentales, los Tribunales, donde tiene su sede la Corte Suprema de Justicia, frente a los bancos y ante los propios edificios donde viven jueces y políticos. Las protestas generalmente son pacíficas, pero no pocas veces terminan en enfrentamientos campales con las fuerzas policiales. Y se extienden a toda la geografía del país. En la ciudad de Rosario, la segunda ciudad de la nación, en pueblos como Casilda, provincia de Santa Fe, y Río Cuarto, en Córdoba, en Jujuy y otras regiones se han desarrollado batallas campales entre manifestantes y fuerzas represivas.

Nadie cree en los políticos ni en los banqueros. La crítica se extiende desde De la Rúa hasta el gobierno de Carlos Menem y la dictadura militar, y pasa a extenderse a toda la clase política, a los personeros de los partidos radicales y peronistas, al FREPASO y a las figuras públicas de la centroizquierda. En Buenos Aires y otras regiones a los políticos profesionales les es imposible acercarse a una manifestación sin ser masivamente repudiados, más de uno ha sido expulsado de lugares públicos. Otro tanto les ha ocurrido a altos funcionarios y legisladores, en la capital federal y en el interior del país.

En el movimiento en curso aún se manifiesta la tendencia a la anarquía, a desconocer la autoridad, y renegar de todo y de todos, pero tal situación no necesariamente tiene que conducir al caos. Suficientes elementos indican el comienzo de búsquedas legítimas, para abrir la conciencia social a la necesidad de luchar por un orden nuevo.

Las movilizaciones actuales junto a una impugnación generalizada a “los políticos” y la demanda de “que se vayan todos”, suman exigencias más politizadas y temas básicos de la política nacional como la nacionalización de la banca, el no pago de la deuda externa, contra la entrega al FMI, la sumisión frente a Washington, la independencia económica y la participación efectiva en los destinos de la nación. En las movilizaciones se ha recuperado el imaginario combativo de la nación, se habla y se reconocen los conceptos pueblo, patria, antimperialismo, solidaridad. Cuba y la Revolución Bolivariana de Venezuela concitan masivas expresiones de apoyo y solidaridad.

Los componentes espontáneos y los rasgos caóticos del movimiento, comienzan a tener expresiones cada vez más orgánicas y muestran un grado mayor de organización. El movimiento reivindicatorio crece con iniciativas de gestación de poder popular, de ejercicio democrático participativo en el gobierno de los recursos e institutos locales. Sin lugar a dudas existe un sujeto político popular que actúa por nuevos derroteros y construye desde su base una perspectiva propia.

En ese potencial social están organizaciones que ya expresan un desarrollo y nivel de madurez como el movimiento de los piqueteros, el Frente Nacional contra la Pobreza, el Movimiento de Defensa de la Salud, Movimiento de Defensa de la Escuela Pública, junto a decenas y cientos de asambleas barriales, de redes comunicativas comunitarias, en distintos estadios de consolidación, pero que se caracterizan por actuar decididamente, que autoconvocan manifestaciones, cortan rutas y mantienen en tensión a la clase política.

El grado de desarrollo del movimiento social y sus organizaciones se constató de manera significativa en la manifestación que cada 24 de marzo recuerda el cruento golpe militar de 1976 y hace honor a las víctimas de terrorismo de estado. La tradicional marcha dejó de ser patrimonio exclusivo de las organizaciones de izquierda y de las fuerzas democráticas. Contó con la participación del más amplio conjunto del movimiento popular. No solo fue multitudinaria, sobre todo expresó la unidad combativa que se ha ido forjando en la lucha.

Insertas en el actual movimiento están también organizaciones de más larga data, corrientes sindicales revolucionarias, el reorganizado movimiento estudiantil y universitario que se sacude la gremialización de la política tradicional, profesionales comprometidos con las luchas populares y militares progresistas.

En la eclosión de nuevos y antiguos movimientos sociales que se da al interior de la sociedad, la izquierda histórica tiene una presencia muy definida. Se le respeta por su tradición contestataria. También tiene retos y nuevas posibilidades.

¿De qué crisis hablamos?

La opción de continuidad del sistema capitalista que se instauró a principios de la década de 1990 en Argentina, cuyo eje fue la convertibilidad, una feroz privatización y la fuerte atadura al endeudamiento externo, trajo aparejada una sostenida depauperación del organismo social y la agudización sin precedentes de sus contradicciones dialécticas.

El neoliberalismo, al promover profundas alteraciones en las estructuras sociales, culturales y económicas, de consecuencias regresivas, se constituye en una fuerza de desintegración que en la medida que alcanza sus objetivos —y como condición para alcanzarlos— levanta serios obstáculos para el avance progresivo de nuestros pueblos. Esta situación venía agudizándose desde las postrimerías del menemismo y al gobierno de De la Rúa le correspondió transitar el episodio terminal.

La crisis del modelo ha puesto en evidencia una realidad histórica ineludible. El último medio siglo argentino y este tránsito traumático al XXI prueban que los partidos tradicionales de la burguesía argentina están incapacitados para hallar las fórmulas de progreso social que precisa el país.

No nos cabe dudas de que en la acentuación de la dependencia económico financiera del FMI, y en la renovación de la “carnalidad” con los Estados Unidos, no hay alternativa de futuro. Los préstamos millonarios solo servirán para postergar la situación.

Se prevé que este año la desocupación alcance al 30 % de PEA, de los 37 millones de ciudadanos, 20 millones serán pobres, incluyendo unos siete millones de indigentes de los que dos millones estarán en situación de indigencia extrema. Por demás ninguno de los catorce puntos acordados por el Gobierno y los ejecutivos provinciales trata de cómo paliar la crítica situación en que viven las masas argentinas.

La situación es en extremo compleja y en nada ayuda a rebajar los niveles de explosividad social. Así en el horizonte argentino pueden vislumbrarse nuevos y más complejos estallidos, hasta que la agudización de las contradicciones fundamentales que se desenvuelven en el seno de la nación conduzcan a una fractura definitiva del sistema.

Las opciones que tiene ante sí el *establishment* como elite y la clase burguesa en su conjunto, están dadas por dos alternativas medulares: la búsqueda de una salida manipulativa desde los mecanismos de hegemonía ideológica y política que están establecidos, o la profundización de la actual dictadura civil y la instauración de un fuerte poder represivo.

El alto grado de agudización de las contradicciones sociales no parece favorecer las alternativas de recomposición dentro de los moldes existentes. La salida dictatorial, con un rol importante del Ejército y los aparatos represivos policiales, es una opción más probable. A ello apunta además, el actual curso de la estrategia global y continental del imperialismo norteamericano. El perseguido debilitamiento de la clase política argentina y la manifiesta postergación de la ayuda financiera

pueden estar sustentados en el superobjetivo de precipitar el caos económico y político, y la vuelta del terrorismo de estado.

El *establishment* y los estrategias del imperio, sin embargo, no actúan en un país inerme. También existen potencialidades para que en el curso de los acontecimientos, en el concierto del movimiento reivindicativo popular, se abra un escenario donde a las fuerzas burguesas les sea muy difícil imponer su dictado.

En octubre de 2001 millones de argentinos aún confiaban en el sistema. Fueron a sus casas, elaboraron las boletas y asistieron a los colegios para depositar sus votos en blanco o anulados intencionalmente. Dos meses después dieron prueba de que su paciencia había llegado al límite, salieron a las calles y produjeron la caída del gobierno. Ahora en el 2002 el comportamiento ciudadano permite pensar que esta confianza se ha perdido. Que estamos ante la fractura definitivamente del consenso burgués neoliberal en el país.

Está presente la interrogante de si muchos de los que están en las calles quieren regresar a lo que tenían o cambiar definitivamente el sistema. Hay que observar el lugar que ocupará en el futuro el amplio espectro medio, pero será definitivo el empuje que ya logran dar los obreros y trabajadores, que incluyendo a los desocupados, constituyen el 75 % de la población del país.¹⁷

¿Por qué no prever escenarios en los que esté presente el crecimiento de los movimientos populares, el aumento de su radicalización y organización. ¿No podrán los patriotas argentinos recomponer un nuevo proyecto nacional viable, capaz de incluir a todas las fuerzas y sectores que estén contra el neoliberalismo y su proyecto antinacional? ¿Podremos asistir a una alternativa de poder desde lo popular y revolucionario?

Más que identificar una crisis como momento histórico singular, se ha abierto para Argentina un cruento proceso de crisis terminal del modelo neoliberal y perspectivamente del sistema capitalista. La crisis eclosionó con un violento estallido popular, apareció sin que se percibiera la existencia de un sujeto social portador —con capacidad— para liderar el cambio necesario, pero esta situación no es estática.

Un nuevo sujeto social resultante de la resistencia frente a la agresión neoliberal ha hecho su entrada en la historia argentina. De manera inédita, desde lo más genuino del movimiento nacional popular ha comenzado su transformación en sujeto revolucionario. Se trata de un proceso complejo, de difícil avance y rupturas desenajadoras, no exento de retrocesos y zig zags, pero cuya

¹⁷ Jaime Fuchs y José Carlos Vélez, “Argentina de rodillas. Terrorismo económico: De Martínez de la Hoz a Cavallo”, *Tribuna Latinoamericana*, Buenos Aires, 2001, p. 274.

dialéctica definitivamente anuncia un nuevo alumbramiento. En tal perspectiva, ¿de que crisis hablamos? ¿De una crisis —situación— prerrevolucionaria?